

**No. 42748**

---

**Mexico  
and  
Honduras**

**Treaty between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Honduras on the execution of criminal sentences. Tegucigalpa, 4 July 2003**

**Entry into force:** *17 April 2004 by notification, in accordance with article XX*

**Authentic text:** *Spanish*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *Mexico, 24 May 2006*

---

**Mexique  
et  
Honduras**

**Traité entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République du Honduras relatif à l'exécution des sentences pénales. Tegucigalpa, 4 juillet 2003**

**Entrée en vigueur :** *17 avril 2004 par notification, conformément à l'article XX*

**Texte authentique :** *espagnol*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *Mexique, 24 mai 2006*

[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

**TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SOBRE EJECUCION  
DE SENTENCIAS PENALES**

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Honduras, en adelante denominados "las Partes",

**ANIMADOS** por el deseo de mejorar la administración de justicia y de facilitar la readaptación social de las personas sentenciadas, permitiéndoles cumplir sus condenas en el país del cual son nacionales;

Han acordado lo siguiente:

**ARTICULO I  
DEL OBJETO**

Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras se comprometen a brindarse mutuamente cooperación en materia de traslado y ejecución de sentencias penales de personas condenadas a privación de libertad o a las medidas de seguridad de conformidad con las condiciones previstas en el presente Tratado, respetando la soberanía de cada Estado y de conformidad con su derecho interno.

**ARTICULO II  
DEFINICIONES**

Para los efectos del presente Tratado se entenderá por:

1. Estado Trasladante: El Estado cuyos tribunales competentes han sentenciado al reo y de cuyo territorio habrá de ser trasladado.
2. Estado Receptor: El Estado al que el reo habrá de ser trasladado para la ejecución de la sentencia penal dictada en el Estado Trasladante.

3. Sentencia: Es la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena o medida de seguridad por la comisión de un delito, la privación de la libertad o restricción de la misma, ya sea que esta última consista en un régimen de libertad condicional, de condena de ejecución condicional o de otras formas de supervisión sin detención.

4. Sentencia firme y ejecutoriada: Aquella sentencia definitiva contra la cual no esté pendiente recurso ordinario o extraordinario alguno, sea que aquella haya sido consentida por el reo, expresamente o que se haya vencido el término para su interposición, o que los segundos no sean procedentes o se hayan intentado y no hayan prosperado.

Para el caso del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, también se considerará que la sentencia es firme y ejecutoriada para los efectos del presente Tratado y en particular para el Artículo V del mismo, cuando en los casos de pena privativa de la libertad, el reo no haya intentado el amparo directo por renuncia expresa o se haya desistido una vez interpuesto.

5. Medidas de Seguridad: Prevenciones legales encaminadas a impedir la comisión de delitos por quienes, sin haber cometido ninguno hasta el momento, por sus circunstancias personales exista el temor fundado de que los realicen, o bien, para la prevención de los que puedan cometer quienes ya han sido autores de alguno.

6. Reo: La persona que en el territorio de una de las Partes es declarada responsable de un delito por una sentencia firme y ejecutoriada o, en su caso, por una resolución administrativa firme, en virtud de la cual se encuentre sujeta a:

- i Una pena privativa o restrictiva de la libertad;
- ii Una medida de seguridad, o
- iii Cualquier otra medida legal.

7. Domiciliado: La persona que ha radicado en el territorio de una de las Partes, por lo menos cinco años con el propósito de permanecer en él.

### **ARTICULO III AMBITO DE APLICACION**

1. Las penas o medidas de seguridad impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales hondureños, podrán ser cumplidas en establecimientos penales de la República de Honduras, bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y de la legislación hondureña.

2. Las penas o medidas de seguridad impuestas en la República de Honduras a nacionales mexicanos, podrán ser cumplidas en establecimientos penales de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y de la legislación mexicana.

3. Las medidas de seguridad dictadas como sanción en el Estado Trasladante, se deberán contemplar en el Estado Receptor, aunque no exista identidad en la norma pero que los elementos constitutivos sean iguales y siempre y cuando el traslado respectivo no contravenga el espíritu de las mismas o implique violación a algún principio de derecho internacional, incluida la aplicación extraterritorial.

### **ARTICULO IV FORMA DE LAS SOLICITUDES**

Las solicitudes de traslado y las respuestas se formularán por escrito.

### **ARTICULO V CONDICIONES DE APLICABILIDAD**

El presente Tratado se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:

1. Que los actos u omisiones que han dado lugar a la sentencia penal, sean también punibles o sancionables en el Estado Receptor, aunque no exista identidad en la redacción de la norma pero que los elementos del tipo penal sean iguales.
2. Que el reo sea nacional del Estado Receptor.
3. Que el reo no esté domiciliado en el Estado Trasladante y además no tenga pendiente en su contra juicio o procedimiento alguno.
4. Que el delito no sea de carácter político o de índole estrictamente militar en el Estado Receptor.
5. Que la condena no sea la pena de muerte, a menos que ésta haya sido conmutada por el Estado Trasladante al proponer el traslado.
6. Que la parte de la sentencia del reo que quede por cumplirse en el momento de la solicitud sea de por lo menos seis meses.
7. Que la sentencia sea firme y ejecutoriada.
8. Que no exista solicitud de extradición sobre el reo formulada por un tercer Estado, ni que se encuentre en trámite o que haya sido acordada.
9. Que la pena o medida de seguridad impuesta por la sentencia condenatoria al reo tenga una duración determinada no mayor a la máxima permitida por el Estado Receptor.
10. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado Receptor.
11. Que el reo otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido informado previamente de las consecuencias legales del mismo.
12. Que el reo haya cumplido con el pago de multas, gastos de justicia, reparación civil o condena pecuniaria de toda índole que estén a cargo conforme lo dispuesto en sentencia condenatoria o que garantice su pago a satisfacción del Estado Trasladante. En el caso de los reos insolventes se estará a lo que dispongan las leyes del Estado Trasladante, procurando en todo caso que tal situación no obstaculice el traslado del reo.

**ARTICULO VI  
AUTORIDADES COORDINADORAS**

Para asegurar el debido cumplimiento de la ejecución de las sentencias penales entre las Partes, los Estados Unidos Mexicanos designa como Autoridad Coordinadora a la Procuraduría General de la República, y la República de Honduras a la Secretaría de Gobernación y Justicia.

**ARTICULO VII  
SUMINISTRO DE INFORMACION**

Las Partes informarán de manera personal a todo reo nacional de la otra Parte sobre la existencia del presente Tratado, los beneficios que le brinda la aplicación del mismo y las consecuencias jurídicas que pueden derivar de su traslado.

**ARTICULO VIII  
SOLICITUDES DE TRASLADO**

El reo podrá presentar una petición de traslado directamente al Estado Receptor a través de su representación diplomática o consular, de un representante legal o de sus familiares. Asimismo, podrá presentar su petición de traslado al Estado Receptor por conducto del Estado Trasladante.

**ARTICULO IX  
PROCEDIMIENTO PREVIO AL TRASLADO**

1. Para acceder a la petición de traslado, ambas Partes valorarán el delito por el que el reo fue condenado, los antecedentes penales, su estado de salud, los vínculos que el reo tenga con la sociedad del Estado Receptor, y toda circunstancia que pueda considerarse como factor positivo para la readaptación social del reo en caso de cumplir la condena en el Estado Receptor.

2. El Estado Trasladante tiene facultad discrecional para autorizar el traslado. En el mismo sentido el Estado Receptor la tendrá para aceptarlo.

3. En todos los casos, la voluntad del reo de ser trasladado deberá manifestarse por escrito.

4. El reo deberá ser informado por escrito de cualquier gestión realizada por las Partes, en aplicación de los párrafos precedentes, así como de las decisiones adoptadas por cualquiera de éstas respecto de la solicitud de traslado.

5. La manifestación del consentimiento del reo se regirá por la ley del Estado Trasladante.

6. Si el reo hubiere formulado una petición para su traslado al Estado Receptor, éste lo comunicará al Estado Trasladante para que después de cumplidas las gestiones pertinentes proceda a su realización.

7. Si se aprobara la solicitud de traslado, las Partes convendrán el lugar, la fecha de entrega del reo y la forma en que se realizará el traslado con la mayor seguridad posible.

8. Antes de que se realice el traslado, el Estado Trasladante dará oportunidad al Estado Receptor, si éste lo solicita, de verificar que el consentimiento del reo para su traslado fue otorgado voluntariamente y con pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas implícitas del mismo.

#### **ARTICULO X NEGATIVA AL TRASLADO**

1. Cualquiera de las Partes tendrá la facultad de no aprobar el traslado de un reo.

2. Cuando el Estado Trasladante no apruebe el traslado de un reo, comunicará su decisión de inmediato al Estado Receptor, explicando el motivo de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente. Cuando se modifiquen las condiciones que sirvieron de base a la negativa del traslado, cualquiera de las Partes podrá solicitar el traslado del reo.

3. Si después de cumplir su condena el reo trasladado reincide en la comisión de un delito en el territorio del Estado Trasladante, este último podrá negar cualquier solicitud de traslado del reo formulada por el Estado Receptor o por el mismo reo.

#### **ARTICULO XI DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA**

1. El Estado Receptor acompañará a la solicitud de traslado:

- a) un documento que acredite que el reo es nacional de dicho Estado;
- b) una copia certificada de las disposiciones legales de las que resulte que los actos u omisiones que han dado lugar a la condena constituyen también un delito en el Estado Receptor;
- c) información acerca de los factores pertinentes y la probabilidad de que el traslado contribuya a la reinserción social de aquél, tomando en cuenta aspectos como la edad, los vínculos de residencia en el territorio u otros motivos, en el Estado Receptor, y
- d) la información aproximada de cómo se cumplirá la condena en dicho Estado Receptor, especialmente la referida a la modalidad y tiempo.

2. El Estado Trasladante proporcionará al Estado Receptor la documentación certificada que indique lo siguiente:

- a) una copia certificada de la sentencia, haciendo constar que es firme y ejecutoriada;
- b) una copia certificada de las disposiciones legales aplicables;
- c) la indicación de la duración de la pena, el tiempo que sería abonado de permanecer en el Estado Trasladante, por motivos tales como trabajo, buena conducta y prisión o detención preventiva;
- d) un documento en el que conste el consentimiento del reo para el traslado;



- e) información sobre la índole y gravedad del delito, los antecedentes penales del reo, las condiciones de salud de éste y cualquier información adicional que pueda ser útil a las autoridades del Estado Receptor, y
- f) los estudios de personalidad que permitan identificar la trayectoria intrainstitucional de cada persona a ser trasladada, así como su nivel de peligrosidad, con fines de clasificación y tratamiento.

3. Todos los documentos presentados por las Partes deberán ser apostillados, de conformidad con la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización en Documentos Públicos, de la que ambos Estados son Parte.

4. Si el Estado Receptor considera que los informes proporcionados por el Estado Trasladante no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Tratado, podrá solicitar información complementaria.

5. Cualquiera de las Partes podrá, antes de formular una solicitud de traslado, solicitar a la otra Parte los documentos e informaciones a que se refieren los numerales 1 y 2 de este Artículo.

## **ARTICULO XII ENTREGA Y GASTOS DEL TRASLADO**

1. Aprobado el traslado, las Partes convendrán el lugar y la fecha de la entrega del reo y la forma como se hará efectiva. El Estado Receptor será el responsable de la custodia y transporte del reo desde el momento de la entrega.

2. Todos los gastos relacionados con el traslado del reo hasta la entrega para su custodia al Estado Receptor serán por cuenta del Estado Trasladante.

3. El Estado Receptor se hará cargo de los gastos de traslado desde el momento en que el reo quede bajo su custodia.

4. El Estado Trasladante no tendrá derecho a reembolso alguno por los gastos efectuados con motivo del cumplimiento de la ejecución de la condena del reo.

### **ARTICULO XIII JURISDICCION DEL ESTADO TRASLADANTE**

1. El Estado Trasladante mantendrá la jurisdicción exclusiva con referencia a las sentencias impuestas y cualesquiera procedimientos que involucren revisión, modificación o anulación de las sentencias impuestas por sus tribunales de justicia. En consecuencia, el Estado Receptor, al recibir una notificación del Estado Trasladante de cualquier decisión que afecte una sentencia, deberá adoptar las medidas que correspondan, conforme a dicho aviso.

2. El Estado Trasladante conservará la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia al reo, en lo que sea aplicable de conformidad con su legislación, que en cada caso establecerá el procedimiento y las excepciones aplicables. El Estado Receptor, al recibir notificación de cualquier decisión al respecto, deberá instrumentar de inmediato las medidas correspondientes.

### **ARTICULO XIV JURISDICCION DEL ESTADO RECEPTOR**

1. El cumplimiento de la sentencia de un reo se sujetará a las leyes y procedimientos del Estado Receptor, incluyendo la aplicación de toda disposición relativa a la reducción del periodo de prisión por medio de libertad vigilada, libertad condicional o cualquier otra alternativa a la prisión.

2. Ninguna pena de prisión será ejecutada por el Estado Receptor, de tal modo que prolongue su duración más allá de la fecha en que quedaría cumplida, de acuerdo con la sentencia del Estado Trasladante.

3. Las autoridades coordinadoras de las Partes intercambiarán anualmente informes sobre la situación que guarda la ejecución de las sentencias de todas las personas trasladadas conforme al presente Tratado, incluyendo, en particular, los relativos a beneficios al reo de acuerdo con la legislación interna de cada Parte. Las Partes podrán solicitar, en todo momento, un informe especial sobre la situación que guarde la ejecución de una sentencia individual.

4. Un reo entregado para la ejecución de una sentencia conforme al presente Tratado, no podrá ser nuevamente detenido, procesado o sentenciado en el Estado Receptor por el mismo delito que motivó la sentencia a ser ejecutada, ni tampoco se podrá convenir la pena en una sanción pecuniaria.

5. El que un reo haya sido trasladado conforme a lo establecido en este Tratado, no afectará sus derechos civiles en el Estado Receptor, más allá de lo que pudiera afectarlo, conforme a las leyes del Estado Receptor, por el hecho mismo de haber sido objeto de una condena en el Estado Trasladante.

#### **ARTICULO XV APLICACION DEL TRATADO EN CASOS ESPECIALES**

1. El presente Tratado también podrá aplicarse a las personas sujetas a vigilancia y otras medidas de acuerdo con las leyes de cualquiera de las Partes, relacionadas con infractores menores de edad, siempre que se demuestre la conveniencia del traslado para fines de su readaptación social. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien está legalmente facultado para otorgarlo.

2. Si así lo acordaren las Partes y a efecto de su tratamiento en el Estado Receptor, el presente Tratado podrá aplicarse a personas a las cuales las autoridades competentes hubieran declarado inimputables. Las Partes acordarán, de conformidad con su derecho interno, el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien legalmente esté facultado para otorgarlo.

3. Por acuerdo especial entre las Partes y por razones humanitarias, los reos de quienes se haya comprobado plenamente que sufren una enfermedad que se encuentre en fase terminal, o sean de edad muy avanzada, podrán ser trasladados para su tratamiento en instituciones del país de su nacionalidad.

4. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las Partes pueden tener para conceder o negar el traslado del reo.

#### **ARTICULO XVI FALSIFICACION DE DOCUMENTOS**

En caso de que algún reo haya utilizado documentación falsa de un nacional del Estado Receptor, para obtener el traslado hacia el territorio de la otra Parte, ésta realizará los ajustes necesarios para que el reo retorne al Estado Trasladante y termine de cumplir su condena conforme a la sentencia que le fue impuesta, sujetándose a las consecuencias jurídicas que se originen de su conducta.

#### **ARTICULO XVII TRANSITO**

Si el reo, al ser trasladado, tuviera que atravesar el territorio de un tercer Estado, éste deberá ser notificado mediante envío de la resolución que concedió el traslado por el Estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo. En tales casos, el Estado de tránsito podrá o no otorgar su consentimiento al paso del reo por su territorio.

#### **ARTICULO XVIII ADECUACION AL DERECHO INTERNO**

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias y establecer los procedimientos administrativos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este Tratado, siempre y cuando no se contrapongan a su legislación nacional.

**ARTICULO XIX  
APLICACION**

Este Tratado será aplicable al cumplimiento de sentencias que hayan sido dictadas con anterioridad y con posterioridad a su entrada en vigor.

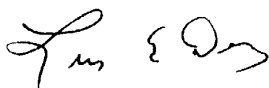
**ARTICULO XX  
DISPOSICIONES FINALES**

1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última Nota diplomática por la que las Partes se notifiquen haber cumplido los requisitos constitucionales respectivos.

2. Este Tratado tendrá una duración indefinida y cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita, a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva sesenta (60) días después de haberse efectuado dicha notificación.

Hecho en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el cuatro de julio de dos mil tres, en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE LOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**



**Luis Ernesto Derbez Bautista**  
Secretario de Relaciones Exteriores

**POR EL GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS**



**Guillermo A. Pérez-Cadalso Arias**  
Secretario de Relaciones Exteriores

[TRANSLATION - TRADUCTION]

TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HONDURAS ON THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL SENTENCES

The Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Honduras,

Hereinafter referred to as "the Parties",

Moved by a desire to improve the administration of justice and to facilitate the social reintegration of convicted persons by allowing them to serve their sentences in the country of which they are nationals,

Have agreed as follows:

*Article I. Purpose*

The United Mexican States and the Republic of Honduras undertake to cooperate with each other with regard to the transfer and the enforcement of the sentences of persons sentenced to deprivation of liberty or to security measures in accordance with the terms of this Treaty, on a basis of respect for the sovereignty of each State and in compliance with its domestic law.

*Article II. Definitions*

For the purposes of this Treaty:

1. "Sending State" means the State whose competent courts have sentenced an offender and from whose territory he is to be transferred.
2. "Receiving State" means the State to which the offender is to be transferred for enforcement of the criminal sentence handed down in the sending State.
3. "Sentence" means a final judicial decision which imposes on a person, as a penalty or a security measure in respect of the commission of an offence, deprivation of liberty, or restriction of liberty either in the form of probation or a suspended sentence or in some other form of supervision without detention.
4. "Firm and enforceable sentence" means a final sentence against which no general or special remedy is pending, either because the offender has expressly accepted the sentence or because the time limit for seeking such remedies has expired or because such remedies are not admissible or have been sought without prospering.

In the case of the United Mexican States, a sentence shall also be deemed firm and enforceable for the purposes of this Treaty, in particular of its article V, when in the event of a sentence of deprivation of liberty the offender has waived direct *amparo* by express renunciation or has withdrawn an application for direct *amparo*.

5. "Security measures" means preventive legal measures intended to prevent the commission of offences by persons who have not yet committed any offence but whose personal circumstances give rise to a justified fear that they will commit an offence, or to prevent the commission of further offences by persons who are already the perpetrators of an offence.

6. "Offender" means a person who, in the territory of one of the Parties, has been declared to be the perpetrator of an offence in a firm and enforceable sentence or, as the case may be, in a firm administrative decision under which the person is subject to:

- (i) A sentence of deprivation or restriction of liberty;
- (ii) A security measure; or
- (iii) Any other legal measure.

7. "Domiciled" means resident in the territory of one of the Parties for at least five years with the intention of remaining there.

### *Article III. Scope*

1. Sentences or security measures imposed in the United Mexican States on Honduran nationals may be served in penal establishments of the Republic of Honduras under the supervision of its authorities, in accordance with the provisions of this Treaty and of Honduran legislation.

2. Sentences or security measures imposed in the Republic of Honduras on Mexican nationals may be served in penal establishments of the United Mexican States under the supervision of its authorities, in accordance with the provisions of this Treaty and of Mexican legislation.

3. The sending State shall take cognizance of security measures ordered as a penalty even when the relevant laws are not identical, provided that the constituent elements are equivalent and that the transfer in question does not contravene the spirit of the measures or violate any principle of international law, including the principle of extraterritorial application.

### *Article IV. Form of applications*

Applications for transfer and the replies thereto shall be formulated in writing.

### *Article V. Conditions of applicability*

This Treaty shall be applied solely under the following conditions:

1. The acts or omissions which gave rise to the criminal sentence must also be punishable in the receiving State even when the wording of the law in question is not identical, provided that the elements of the description of the offence are equivalent.

2. The offender must be a national of the receiving State.

3. The offender must not be domiciled in the sending State and must not have any legal action or proceedings pending against him.

4. The offence must not be of a political or strictly military nature in the receiving State.
5. The sentence must not be the death penalty, unless it is commuted by the sending State when proposing the transfer.
6. At least six months of the sentence must still to be served at the time when the application is made.
7. The sentence must be firm and enforceable.
8. There must be no application for extradition of the offender formulated by a third State lodged, under consideration or granted.
9. The penalty or security measure imposed on the offender in the sentence must be of a specific duration no longer than the maximum duration permitted by the receiving State.
10. The enforcement of the sentence must not contravene the internal legal order of the receiving State.
11. The offender must consent expressly to the transfer, having been previously informed of the legal consequences thereof.
12. The offender must have completed the payment of any fines, costs, civil compensation or monetary penalty of any kind due from him according to the provisions of the sentence or he must have guaranteed their payment to the satisfaction of the sending State. If the offender is insolvent, the provisions of the laws of the sending State shall apply, but in any event an effort shall be made to ensure that such a situation does not obstruct the offender's transfer.

#### *Article VI. Coordinating authorities*

In order to ensure proper conduct of the enforcement of criminal sentences by the Parties, the United Mexican States designates as its coordinating authority the Office of the Attorney General of the Republic, and the Republic of Honduras designates the Ministry of the Interior and Justice.

#### *Article VII. Provision of information*

Each Party shall inform all offenders having the nationality of the other Party in person of the existence of this Treaty, of the benefits which its application accords them, and of the legal consequences which may arise from their transfer.

#### *Article VIII. Applications for transfer*

An offender may submit a request for transfer directly to the receiving State through its diplomatic or consular representation, a legal representative, or a member of the offender's family. An offender may also submit his request for transfer to the receiving State through the sending State.



*Article IX. Procedure prior to transfer*

1. For the purposes of granting a request for transfer the two Parties shall assess the offence of which the offender was convicted, the legal precedents, the state of the offender's health, the links which he may have with the society of the receiving State, and any other circumstance which may be regarded as a positive factor for the offender's social reintegration if he serves his sentence in the receiving State.

2. The sending State has the discretionary option to authorize the transfer. The receiving State has the same discretionary option to accept it.

3. In all cases, the offender's willingness to be transferred must be stated in writing.

4. The offender shall be informed in writing of any action taken by the Parties pursuant to the preceding paragraphs, as well as of the decisions taken by either of them with regard to the application for transfer.

5. The offender's statement of consent shall be made in accordance with the law of the sending State.

6. When an offender has submitted a request for transfer to the receiving State, that State shall so inform the sending State so that it may carry out the transfer following completion of the relevant procedures.

7. When an application for transfer has been approved, the Parties shall agree on the place and date of the delivery of the offender and on the most secure way possible of effecting the transfer.

8. Before the transfer is effected, the sending State shall give the receiving State an opportunity, if it so requests, to verify that the offender's consent to the transfer was given voluntarily and with full knowledge of the legal consequences implicit therein.

*Article X. Refusal of transfer*

1. Both Parties shall have the option of declining to approve the transfer of an offender.

2. If the sending State does not approve the transfer of an offender, it shall immediately communicate its decision to the receiving State and shall explain the reason for its refusal whenever feasible and appropriate. If any change occurs in the circumstances on which the refusal was based, either Party may request the offender's transfer.

3. If after serving his sentence a transferred offender commits another offence in the territory of the sending State, that State may refuse any application for the offender's transfer submitted by the receiving State or by the offender himself.

*Article XI. Supporting documents*

1. The receiving State shall attach to an application for transfer:

(a) A document certifying that the offender is a national of the receiving State;

(b) A certified copy of the legal provisions showing that the acts or omissions which gave rise to the sentence are also offences in the receiving State;

(c) Information concerning pertinent factors and the likelihood that that the transfer will contribute to the offender's social reintegration, taking into account such considerations as his age, his links with residents of the territory of the receiving State and other circumstances in the receiving State; and

(d) General information about the way in which the sentence will be served in the receiving State, especially with regard to modality and duration.

2. The sending State shall furnish the receiving State with the following certified documents:

(a) A certified copy of the sentence confirming that it is firm and enforceable;

(b) A certified copy of the applicable legal provisions;

(c) An indication of the duration of the sentence and the time which would be credited, for reasons such as work, good conduct and pre-trial or preventive detention, if the offender remained in the sending State;

(d) A document certifying the offender's consent to the transfer;

(e) Information concerning the nature and seriousness of the offence, the offender's criminal record and his state of health and any additional information which may be useful to the authorities of the receiving State; and

(f) Psychological reports, including the history of the referrals between institutions of each person to be transferred and an assessment of the degree to which he represents a danger, for the purposes of classification and treatment.

3. All the documents submitted by the Parties shall be endorsed in accordance with the Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, to which both States are parties.

4. If the receiving State considers that the reports furnished by the sending State are insufficient for the application of this Treaty, it may request supplementary information.

5. Before formulating an application for transfer either Party may request the other Party to provide the documents or information mentioned in paragraphs 1 and 2 of this article.

#### *Article XII. Delivery and transfer costs*

1. Once a transfer has been approved, the Parties shall agree on the place and date of the delivery of the offender and the manner in which it is to be effected. The receiving State shall be responsible for the offender's custody and transport from the moment of delivery.

2. All the costs connected with the transfer of the offender up to his delivery into the custody of the receiving State shall be borne by the sending State.

3. The receiving State shall bear the costs of the transfer from the moment when the offender is placed in its custody.

4. The sending State shall not be entitled to any reimbursement whatsoever of expenditures made in connection with the enforcement of the offender's sentence.

*Article XIII. Jurisdiction of the sending state*

1. The sending State shall retain exclusive jurisdiction with regard to sentences imposed and any procedures pertaining to the review, modification or annulment of such sentences by its courts of justice. Accordingly, on receipt of notification by the sending State of any decision affecting a sentence, the receiving State shall take the appropriate action in the light of such notification.

2. The sending State shall retain the power to grant an offender remission, amnesty or pardon in accordance with its legislation and it shall specify the procedure and the applicable exceptions in each case. On receipt of notification of any such decision, the receiving State shall immediately take the appropriate action.

*Article XIV. Jurisdiction of the receiving state*

1. An offender shall serve his sentence in accordance with the laws and procedures of the receiving State, including the application of any provision concerning reduction of the term of imprisonment by conversion to probation, parole or any other alternative to imprisonment.

2. The receiving State shall not enforce any sentence of imprisonment in such a way as to extend its duration beyond the date on which it would have been completed under the sentence imposed in the sending State.

3. The coordinating authorities of the Parties shall exchange annual reports on the status of the enforcement of the sentences of all persons transferred under this Treaty, including in particular reports on the benefits available to offenders under the domestic legislation of each Party. The Parties may at any time request a special report on the status of the enforcement of an individual sentence.

4. An offender who has been transferred to serve a sentence under this Treaty may not be again detained, tried or sentenced in the receiving State for the same offence which gave rise to the sentence to be served, nor may that sentence be converted to a monetary penalty.

5. The transfer of an offender under the terms of this Treaty shall not affect his civil rights in the receiving State beyond the effects on him under the laws of the receiving State deriving from his conviction in the sending State.

*Article XV. Application of the Treaty in special cases*

1. This Treaty shall also be applicable to persons subject to supervisory or other measures under the laws of either Party relating to juvenile offenders, provided that the appropriateness of such application for the purposes of their social reintegration is demonstrated. Consent to a transfer must be obtained from the person legally empowered to grant it.

2. If the Parties so agree, this Treaty may be applied, for the purposes of their treatment in the receiving State, to persons declared by the competent authorities to be unfit to be charged. The Parties shall agree in accordance with their domestic law on the type of treatment to be given to transferred persons. Consent to a transfer must be obtained from the person legally empowered to grant it.

3. By special agreement between the Parties, offenders who have been conclusively proved to be suffering from a terminal illness or who are of very advanced aged may be transferred on humanitarian grounds for treatment to institutions of the country of their nationality.

4. No provision of this Treaty shall be interpreted in such a way as to limit any power of the Parties to grant or refuse an offender's transfer.

*Article XVI. Falsification of documents*

If an offender has used falsified documents of a national of the receiving State in order to obtain a transfer to its territory, the receiving State shall make the necessary arrangements for the offender to be returned to the sending State to complete the sentence which had been imposed on him, where he shall suffer the legal consequences of his conduct.

*Article XVII. Transit*

If in the course of his transfer an offender has to cross the territory of a third State, that State shall be so notified by transmittal of the decision granting the transfer by the State in whose custody the offender is to be transferred. In such cases, the transit State may grant or withhold its consent to the passage of the offender through its territory.

*Article XVIII. Alignment with domestic law*

The Parties undertake to adopt the necessary legislative measures and establish adequate administrative procedures to fulfil the purposes of this Treaty, provided that such action is consistent with their national legislation.

*Article XIX. Application*

This Treaty shall apply to the enforcement of sentences imposed either before or after its entry into force.

*Article XX. Final provisions*

1. This Treaty shall enter into force 30 days after the receipt of the last diplomatic note by which the Parties notify each other of the completion of their respective constitutional requirements.

2. This Treaty shall be of indefinite duration, and either Party may denounce it by written notification through the diplomatic channel. The denunciation shall take effect 60 days after such notification.

DONE at Tegucigalpa, Honduras, on 4 July 2003 in two original copies in Spanish, both copies being equally authentic.

For the Government of the United Mexican States:

LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA  
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Honduras:

GUILLERMO A. PÉREZ-CADALSO ARIAS  
Minister for Foreign Affairs

[TRANSLATION - TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE  
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS RELATIF  
À L'EXÉCUTION DES SENTENCES PÉNALES

Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République du Honduras, ci-après dénommés "les Parties",

Animés du désir d'améliorer l'administration de la justice et de faciliter la réadaptation sociale des personnes condamnées en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils sont nationaux,

Sont convenus de ce qui suit:

*Article I. Objet*

Les États-Unis du Mexique et la République du Honduras s'engagent à s'entraider mutuellement en matière de transfèrement et d'exécution de sentences pénales de personnes condamnées à la privation de liberté ou à des mesures de sécurité, conformément aux conditions établies dans le présent Traité et en respectant la souveraineté de chaque État ainsi que sa législation interne.

*Article II. Définitions*

Aux fins du présent Accord, on entendra par:

1. "État d'envoi": L'État dont les tribunaux compétents ont imposé une condamnation au délinquant et à partir duquel celui-ci devra être transféré.

2. "État de réception": L'État vers lequel le délinquant devra être transféré, en vue d'y purger la peine prononcée dans l'État d'envoi.

3. "Sentence": La décision judiciaire définitive imposée à une personne à titre de sanction ou de mesure de sécurité pour l'accomplissement d'une infraction entraînant une peine privative ou restrictive de liberté conditionnelle ou d'autres formes de supervision non assorties de détention.

4. "Jugement définitif et condamatoire": Le jugement est considéré comme définitif lorsqu'aucun recours juridique, ordinaire ou extraordinaire, n'est en cours, soit par consentement exprès du condamné soit parce que les délais prévus pour un tel recours ont expiré ou qu'il n'y a pas lieu d'interjeter un recours ou que le recours a été tenté en vain.

Dans le cas du Gouvernement des États-Unis du Mexique, on considèrera également que le jugement est définitif et condamatoire aux effets du présent Traité, et plus particulièrement pour son article V, quand, en cas de peine privative de liberté, le délinquant n'a pas tenté de procédure directe par renonciation exprès ou lorsqu'il s'est désisté après avoir interjeté un recours.

5. "Mesures de sécurité": Les préventions légales visant à empêcher l'accomplissement de délits par les personnes qui, bien qu'elles n'en aient encore commis aucun, de par

leurs circonstances personnelles, risquent fort d'en commettre ou bien pour empêcher les auteurs de précédentes infractions d'en commettre à nouveau.

6. "Délinquant": La personne qui, sur le territoire de l'une des Parties, est déclarée responsable d'un délit suite à un jugement définitif et condamnatore ou, le cas échéant, suite à une décision administrative définitive, et qui lui inflige:

- i. Une peine privative ou restrictive de liberté;
- ii. Une mesure de sécurité; ou
- iii. Toute autre mesure légale.

7. "Domicilié": La personne qui s'est établie sur le territoire de l'une des Parties depuis au moins cinq ans, avec l'intention d'y demeurer.

#### *Article III. Portée du Traité*

1. Les peines ou mesures de sécurité imposées aux États-Unis du Mexique à l'encontre de ressortissants du Honduras pourront être servies dans des établissements pénitentiaires de la République du Honduras, sous la surveillance des autorités de cet État, conformément aux dispositions du présent Traité et de la législation hondurienne.

2. Les peines ou mesures de sécurité imposées au Honduras à l'encontre de ressortissants mexicains pourront être servies dans des établissements pénitentiaires des États-Unis du Mexique, sous la surveillance des autorités mexicaines, conformément aux dispositions du présent Traité et de la législation mexicaine.

3. Les mesures de sécurité prononcées à titre de sanction dans l'État d'envoi devront être maintenues dans l'État de réception, sans tenir compte des différences d'appellation, pour autant que les éléments constitutifs soient identiques et que le transfèrement respectif n'enfreigne pas leur esprit ou n'entraîne pas une violation d'un principe de droit international, y compris dans le cadre de l'application extraterritoriale.

#### *Article IV. Formulation des demandes*

Les demandes de transfèrement et les réponses devront être formulées par écrit.

#### *Article V. Conditions d'application*

L'application du présent Traité sera soumise aux conditions suivantes:

1. Les actes ou omissions pour lesquels le délinquant a été reconnu coupable doivent également être punissables ou sanctionnés dans l'État de réception, même si les appellations sont différentes, pour autant que le fond juridique soit identique.

2. Le délinquant doit être un ressortissant de l'État de réception.

3. Le délinquant ne pourra pas être domicilié dans l'État d'envoi et aucun procès ni aucune procédure ne pourra être entamée à son encontre.

4. Le délit ne sera pas d'ordre politique ni d'ordre purement militaire dans l'État de réception.

5. La peine à purger ne pourra pas être la peine de mort, à moins que l'État d'envoi ne l'ait commuée au moment où il a proposé le transfèrement.

6. La peine que le délinquant doit encore purger au moment de la présentation de la demande doit encore être supérieure à six mois.

7. Le jugement doit être définitif et condamatoire.

8. Aucun État tiers n'a présenté de demande d'extradition, en cours ou consentie, à l'encontre du délinquant.

9. La peine ou la mesure de sécurité imposée au délinquant par le jugement condamatoire ne pourra dépasser la durée maximale permise par l'État de réception.

10. L'exécution de la sentence ne devra pas contrevenir à l'ordre juridique interne de l'État de réception.

11. Le délinquant devra donner son consentement exprès par écrit, après avoir été informé des conséquences juridiques du transfèrement.

12. Le délinquant devra avoir payé, ou garanti le paiement à la satisfaction de l'État d'envoi, les amendes, frais de justice, indemnisations et condamnations financières de tout ordre étant à sa charge en vertu des dispositions de la sentence condamatoire. Pour les délinquants insolubles, on s'en référera aux dispositions de la législation de l'État d'envoi, pour autant que cette situation ne fasse pas obstacle au transfèrement du délinquant.

#### *Article VI. Autorités de coordination*

Afin que l'exécution des condamnations pénales soit strictement respectée entre les Parties, les États-Unis du Mexique désignent le Bureau du Procureur Général de la République en tant qu'autorité de coordination et la République du Honduras désigne à ce même titre, son Ministère de l'Intérieur et de la Justice.

#### *Article VII. Fourniture de renseignements*

Les Parties informeront personnellement tout délinquant ressortissant de l'autre Partie de l'existence du présent Traité, des avantages de son application et des conséquences juridiques éventuelles du transfèrement.

#### *Article VIII. Demandes de transfèrement*

Le délinquant pourra présenter une demande de transfèrement directement auprès de l'État de réception, par le biais de sa représentation diplomatique ou consulaire, d'un représentant légal ou d'un membre de sa famille. Il pourra également présenter sa demande de transfèrement à l'État de réception, par le biais de l'État d'envoi.

#### *Article IX. Procédure préalable au transfèrement*

1. Avant d'accéder à la demande de transfèrement, les deux Parties examineront le délit pour lequel le délinquant a été condamné, son casier judiciaire, son état de santé, ses



liens sociaux avec l'État de réception ainsi que toute circonstance qui pourrait être considérée positive à sa réhabilitation sociale s'il purge sa peine dans l'État de réception.

2. L'État d'envoi est habilité, à sa discrétion, à autoriser le transfèrement et l'État de réception est habilité, à sa discrétion, à l'accepter.

3. En toutes circonstances, le délinquant devra exprimer sa volonté de transfèrement par écrit.

4. Le délinquant devra être tenu informé par écrit de toute démarche menée à bien, en application des paragraphes précédents, ainsi que des décisions adoptées par l'une ou l'autre des Parties à propos de sa demande de transfèrement.

5. La déclaration de consentement du délinquant sera soumise à la législation de l'État d'envoi.

6. Si le délinquant a formulé une demande de transfèrement auprès de l'État de réception, celui-ci en informera l'État d'envoi afin que le transfèrement puisse avoir lieu dès que les démarches correspondantes auront été accomplies.

7. En cas d'approbation de la demande de transfèrement, les Parties conviendront du lieu, de la date de remise du délinquant et de la forme utilisée pour le transfèrement, afin qu'il s'effectue de la manière la plus sûre possible.

8. Avant de réaliser le transfèrement, l'État d'envoi donnera à l'État de réception, si celui-ci le demande, l'opportunité de vérifier si le délinquant a bien exprimé volontairement son désir de transfèrement et en toute connaissance des conséquences juridiques inhérentes à celui-ci.

#### *Article X. Refus de transfèrement*

1. L'une et l'autre Parties auront la faculté de ne pas approuver le transfèrement d'un délinquant.

2. Si l'État d'envoi n'approuve pas le transfèrement d'un délinquant, il communiquera immédiatement sa décision à l'État de réception, en donnant les raisons de son refus, si cela s'avère possible et approprié. En cas de changement des circonstances ayant motivé le refus de transfèrement, l'une ou l'autre des Parties pourra présenter une nouvelle demande de transfèrement.

3. Si, une fois la peine servie, le délinquant transféré se rend coupable d'un autre délit sur le territoire de l'État d'envoi, ledit État d'envoi pourra refuser toute demande de transfèrement formulée par l'État de réception ou par le délinquant en personne.

#### *Article XI. Constitution du dossier*

1. L'État de réception devra accompagner la demande de transfèrement des pièces suivantes:

- a) Un document attestant que le délinquant est bien un ressortissant de cet État;
- b) Une copie certifiée conforme des dispositions juridiques pertinentes indiquant que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'État d'envoi constituent également des infractions dans l'État de réception;

- c) Des renseignements relatifs aux facteurs pertinents et aux possibilités que le transfèrement contribue à la réinsertion sociale du délinquant, compte tenu de considérations telles que l'âge, les liens noués et toutes autres circonstances existant dans l'État de réception;
  - d) Des renseignements généraux concernant la manière dont la peine sera servie dans l'État de réception, notamment en matière de modalités et de durée.
2. L'État d'envoi devra fournir à l'État de réception les documents certifiés conformes indiqués ci-après:
- a) Un exemplaire certifié conforme de la sentence indiquant qu'elle est définitive et condamnatoire;
  - b) Un exemplaire certifié conforme des dispositions juridiques applicables;
  - c) L'indication de la durée de la peine, de la durée déjà purgée et des réductions dont pourrait bénéficier le délinquant pour bonne conduite, travail ou détention préventive;
  - d) Un document montrant que le délinquant consent au transfèrement;
  - e) Des renseignements concernant la nature et la gravité de l'infraction, le casier judiciaire du délinquant, son état de santé et tous renseignements additionnels qui pourraient être utiles aux autorités de l'État de réception;
  - f) Les études de personnalité qui permettent d'identifier la trajectoire intra-institutionnelle de chaque personne devant être transférée, ainsi que le niveau de danger qu'elle représente, aux fins de classification et de traitement.
3. Tous les documents présentés par les Parties devront être revêtus de l'apostille, conformément aux dispositions de la convention qui supprime la nécessité de légaliser des documents officiels et dont les deux États sont partie.
4. Si l'État de réception considère que les rapports fournis par l'État d'envoi ne sont pas suffisants pour permettre l'application du présent Traité, il pourra demander des renseignements complémentaires.
5. Avant de présenter une demande de transfèrement, l'une ou l'autre des Parties pourra demander à l'autre partie de fournir les pièces et renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

### *Article XII. Remise du délinquant et dépenses afférentes au transfèrement*

1. Une fois le transfèrement approuvé, les Parties conviendront des lieu et date auxquels le délinquant sera remis et des modalités de la remise. L'État de réception se chargera de la garde et du transport du délinquant dès le moment où celui-ci lui sera remis.
2. Tous les frais occasionnés par le transfèrement jusqu'au moment où le délinquant est remis entre les mains de l'État de réception seront à la charge de l'État d'envoi.
3. L'État de réception prendra à sa charge les frais de transfèrement à compter du moment où le délinquant lui sera remis.
4. L'État d'envoi n'aura droit à aucun remboursement pour les frais occasionnés par l'exécution de la sentence.

*Article XIII. Juridiction de l'Etat d'envoi*

1. L'État d'envoi conserve la juridiction exclusive pour ce qui est des peines infligées et pour toutes les procédures ayant trait à la révision, la modification ou l'annulation des sentences imposées par ses tribunaux. Par conséquent, dès que l'État de réception aura été notifié par l'État d'envoi de toute décision affectant la sentence, il prendra toutes les mesures voulues, comme spécifié dans la notification.

2. L'État d'envoi conserve ainsi la faculté de commuer la peine du délinquant ou de lui accorder grâce ou pardon, dans la mesure où sa législation l'y autorise; pour chaque cas, il définira la procédure et les exceptions applicables. Dès que l'État de réception aura été notifié par l'État d'envoi de toute décision à ce sujet, il prendra immédiatement toutes les mesures correspondantes.

*Article XIV. Juridiction de l'Etat de réception*

1. La peine infligée au délinquant sera servie conformément aux lois et règlements de l'État de réception, y compris l'application de toute disposition relative à la réduction de la durée de l'emprisonnement pour mise en liberté surveillée, en liberté conditionnelle ou pour toute autre alternative à la peine d'emprisonnement.

2. L'État de réception ne pourra appliquer aucune peine d'emprisonnement susceptible de prolonger la durée d'incarcération au-delà de la date de sortie prévue par la sentence imposée dans l'État d'envoi.

3. Les autorités de coordination des Parties se feront mutuellement rapport tous les six mois de l'état d'exécution des sentences imposées à toutes les personnes transférées en application du présent Traité et elles fourniront notamment des renseignements concernant les avantages offerts aux délinquants aux termes de la législation interne de chaque Partie. Les Parties pourront demander à tout moment un rapport spécial sur l'état d'exécution d'une sentence donnée.

4. Un délinquant transféré pour servir une peine conformément au présent Traité ne pourra être à nouveau détenu, jugé ou condamné dans l'État de réception pour la même infraction que celle qui a donné lieu à la peine devant être servie; ladite sentence ne pourra pas non plus être convertie en une peine pécuniaire.

5. Le fait qu'un délinquant ait été transféré en application du présent Traité n'affectera pas ses droits civils dans l'État de réception, au-delà des effets que le jugement aurait entraînés, en vertu des lois de cet État, du fait qu'une sentence a été imposée audit délinquant dans l'État d'envoi.

*Article XV. Application du Traité dans des cas spéciaux*

1. Le présent Traité pourra également s'appliquer aux personnes soumises à surveillance et à d'autres mesures en vertu des lois de l'une ou l'autre Partie relative aux jeunes délinquants, à condition qu'il soit démontré que le transfèrement est recommandé aux fins de leur réinsertion sociale. Le consentement au transfèrement devra être obtenu de la personne légalement habilitée à ce faire.

2. Le présent Traité pourra s'appliquer aux personnes que l'autorité pertinente considère comme ne pouvant pas être poursuivies, si les Parties en conviennent et afin que la personne concernée puisse se faire traiter dans l'État de réception. Les Parties conviendront du type de traitement que devra suivre la personne transférée conformément à leur droit interne. Le consentement au transfèrement devra être donné par la personne légalement habilitée à ce faire.

3. Par accord spécial des Parties et pour des raisons humanitaires, les délinquants ayant prouvé de manière concluante qu'ils sont atteints d'une maladie entrée dans sa phase terminale ou qui sont très âgés pourront être transférés dans une institution du pays de leur nationalité pour s'y faire traiter.

4. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée de manière à limiter la faculté dont disposent les Parties d'accéder ou non à une demande de transfèrement d'un délinquant.

#### *Article XVI. Falsification de documents*

Si un délinquant produit des documents falsifiés pour revendiquer la nationalité de l'État de réception en vue d'obtenir un transfèrement vers le territoire de l'une des Parties, cet État prendra les mesures voulues pour qu'il retourne dans le pays d'envoi afin d'y purger la peine qui lui a été infligée et de subir les conséquences juridiques de ses actes.

#### *Article XVII. Transit*

Si le transfèrement du délinquant implique le transit par le territoire d'un État tiers, ledit État tiers doit être notifié en conséquence. À cette fin, la décision de l'État responsable du transfèrement, et qui l'a autorisé, devra lui être communiquée. Dans de tels cas, l'État de transit aura la latitude de consentir au passage du délinquant par son territoire ou de s'y opposer.

#### *Article XVIII. Harmonisation de la législation interne*

Les Parties s'engagent à adopter les mesures législatives voulues et à mettre en place les mécanismes administratifs appropriés pour appliquer les objectifs du présent Traité, pour autant qu'ils ne s'opposent pas à leur législation nationale.

#### *Article XIX. Application*

Le présent Traité pourra s'appliquer également à l'accomplissement de peines prononcées avant ou après son entrée en vigueur.

#### *Article XX. Dispositions finales*

1. Le présent Traité prendra effet trente (30) jours après la date de réception de la dernière note diplomatique par laquelle les Parties se seront informées de l'accomplissement des procédures requises à cet effet par leurs constitutions respectives.

2. Il aura une validité indéterminée. Chacune des Parties pourra, à tout moment, manifester sa volonté d'y mettre fin, moyennant notification adressée par écrit et par la voie diplomatique à l'autre Partie, auquel cas le Traité cessera de produire ses effets soixante (60) jours après ladite notification.

Fait en la ville de Tegucigalpa, Honduras, le quatre juillet de l'an deux mil trois, en deux exemplaires originaux rédigés en langue espagnole et faisant également foi.

Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique :  
Le Secrétaire aux Affaires étrangères,  
LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA

Pour le Gouvernement de la République du Honduras :  
Le Secrétaire aux Affaires étrangères,  
GUILLERMO A. PÉREZ-CADALSO ARIAS

